

Editorial elaborado por el equipo del Instituto Progresista-IPV, con base en la información política disponible hasta el 18 de enero de 2026 sobre la situación en Venezuela.

Editorial

Ni ruptura ni transición: la administración tutelada del poder en Venezuela

En Venezuela existe un proceso de reacomodo del poder bajo tutela de Estados Unidos. El estadio de la transición democrática es distante. Lo que se observa no es una ruptura con el pasado, sino una reorganización pragmática donde cada movimiento (una excarcelación, una reunión, un cambio ministerial o un gesto diplomático) funciona como ficha dentro de una negociación mayor. La captura de Nicolás Maduro no abrió automáticamente un ciclo democrático. Abrió una etapa de administración política del Estado venezolano, donde Washington marca el ritmo, el chavismo se adapta para sobrevivir y la oposición democrática disputa legitimidad más que control real.

Este momento no puede leerse sin retroceder al 28 de julio de 2024. Aquel proceso electoral, marcado por irregularidades y el desconocimiento internacional, terminó de erosionar la legitimidad institucional del país. Desde entonces, el chavismo dejó de simular normalidad democrática y se concentró en preservar el poder mediante control, fragmentación interna y represión. El 3 de enero de 2026 no es un punto de partida, sino la consecuencia de esa deriva. Venezuela entra ahora en una fase donde su destino se discute fuera de sus fronteras, con actores como Donald Trump y Marco Rubio señalando que el proceso electoral del 28 de julio de 2024 no fue legítimo. Esto no hace más que irrespetar la voluntad soberana del pueblo venezolano que se manifestó democráticamente ese día.

La administración Trump ha optado por un enfoque pragmático. Más que promover un quiebre inmediato, Estados Unidos impulsa una tutela política y económica centrada en estabilidad, control del aparato coercitivo y reactivación petrolera. La visita del director de la CIA a

Caracas confirma esta lógica de cooperación en inteligencia, gobernabilidad y economía antes que de democratización acelerada. Washington privilegia el orden administrado sobre la épica democrática.

En ese marco, Delcy Rodríguez se consolida como el pivote interno del proceso. No como figura de transición democrática, sino como administradora del chavismo post-Maduro bajo supervisión internacional. Su discurso ante la Asamblea Nacional y sus gestos hacia Estados Unidos revelan un giro pragmático: reformas a la Ley de Hidrocarburos, apertura a la inversión extranjera, reordenamiento de PDVSA y creación de fondos financieros. El chavismo abandona dogmas ideológicos para abrazar una lógica de supervivencia política y económica.

En la agenda energética de esta semana también se vivió un momento revelador sobre el futuro petrolero de Venezuela. El intento de Donald Trump por atraer a las principales compañías petroleras mundiales a invertir en el país chocó con una dosis de realidad de parte de los ejecutivos. En un encuentro en la Casa Blanca con altos directivos, incluido el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, varios líderes empresariales dejaron saber que bajo las condiciones actuales Venezuela sigue siendo “no invertible”, debido a la falta de un marco legal claro, seguridad jurídica y estabilidad política, así como al legado de expropiaciones pasadas que ha marcado su experiencia en el país. Trump respondió con dureza a estas advertencias, llegando incluso a señalar que las inversiones no se harían con Venezuela sino directamente con Estados Unidos, prometiendo protección y seguridad a las empresas bajo esa lógica. Esta dinámica expone que, aunque la administración estadounidense busca hacer del petróleo un instrumento de reconfiguración económica, las grandes petroleras no están dispuestas a comprometer capital significativo sin reformas profundas y garantías que vayan más allá de los anuncios presidenciales.

En el plano internacional, reaparece con fuerza la figura de Félix Plasencia, no como un diplomático estatal, sino como un operador político del chavismo. Plasencia mantiene un vínculo histórico con Delcy Rodríguez desde su etapa de formación en el Reino Unido y ha sido, desde entonces, una de sus fichas de mayor confianza. Su trayectoria está marcada más por el madrinazgo político que por una carrera institucional clásica. Existen dos lecturas sobre su paso recurrente por distintos cargos. Para algunos es un ejecutor rápido, eficiente en cerrar tareas específicas y por eso rota con frecuencia; para otros, es removido por ineficiencia, pero siempre protegido por Delcy, lo que explica su permanente reaparición en la escena. En cualquiera de los casos, su presencia constante no responde

a una lógica de Estado, sino a la del clan Rodríguez. El rol de Plasencia en Washington no es diplomático en sentido estricto: es una forma de ingeniería política internacional destinada a vender una imagen de normalización sin desmontar la estructura autoritaria que sostiene al régimen.

Diosdado Cabello, lejos de desaparecer, se adapta. Su presencia junto a Gustavo González López en la reunión con el director de la CIA (ambos sancionados por violaciones a derechos humanos y señalados por vínculos ilícitos) revela que Washington no dialoga solo con tecnócratas, sino con quienes controlan efectivamente inteligencia, fuerzas coercitivas y estructuras armadas. Cabello no es un actor de transición, sino un garante del orden interno bajo presión internacional, necesario para evitar fracturas, sabotajes o desbordes violentos.

Un movimiento clave dentro de este reacomodo fue el ajuste ministerial que desplazó a Álex Saab del centro del poder económico. Saab no fue un funcionario más; fue pieza central de la arquitectura financiera del régimen, primero vinculado a Tarek El Aissami y luego convertido en uno de los operadores más valiosos de Maduro. Su concentración de poder y sus métodos nunca fueron plenamente compatibles con el Grupo Delcy, que desconfiaba de sus formas y de su autonomía. Su salida era una pieza que Delcy Rodríguez necesitaba mover desde hace tiempo y que ahora logra ejecutar. Además, constituye una señal directa hacia Washington al retirar del círculo de poder a una figura señalada internacionalmente por lavado de activos, lo que facilita el proceso de lavado de imagen institucional que hoy intenta proyectar el régimen bajo tutela externa.

En paralelo, la situación de los presos políticos sigue mostrando la lógica real del poder. Las excarcelaciones avanzan de forma lenta, selectiva y fragmentada. Aunque existen cifras variables, lo constante es el patrón. No hay una política humanitaria estructural, sino una administración política del encierro. En muchos casos, los detenidos responden a disputas internas del chavismo, donde distintas facciones controlan “sus” presos como activos de negociación. No existe un mando único del sistema represivo, sino un mapa tribal del poder, lo que explica la resistencia, lentitud y discrecionalidad del proceso.

En el ámbito opositor, la semana dejó ver dos planos distintos. Por un lado, María Corina Machado logró reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, pero no fue recibida como ella esperaba. No hubo foto oficial, no hubo declaración conjunta ni señales de que Washington la vea como conductora del proceso. Tras ese encuentro, su agenda se trasladó al

Congreso y al Senado, donde sí obtuvo respaldo político, pero no control operativo. Machado conserva un capital simbólico internacional importante y su liderazgo tiene apoyo nacional hasta el momento. Sin embargo, el proceso real se mueve en otras coordenadas.

Por otro lado, emerge con más claridad lo que puede denominarse una “oposición parlamentaria”, reflejada en la figura de Stalin González como jefe de esa fracción parlamentaria. Más allá de que muchos los etiqueten como “falsa oposición”, este sector ocupa hoy un espacio institucional reducido pero real. Su tarea es compleja: deben denunciar abusos desde dentro sin exponerse a persecución, diferenciarse de la oposición complaciente que durante años sirvió para simular pluralismo y construir una narrativa creíble ante la sociedad civil y la comunidad internacional. No controlan el poder, pero pueden disputar el relato, la legalidad y la visibilidad institucional.

En el fondo, todo el proceso gira alrededor del petróleo. Estados Unidos busca administrar ventas, definir operadores y condicionar ingresos estratégicos. Delcy acepta ese marco porque entiende que la estabilidad económica es la base mínima para cualquier supervivencia política. El reacomodo actual es, por ahora, de mayor utilidad en lo económico que en lo democrático: primero orden, luego política.